LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN EN MATERIA ELECTORAL (PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, ORDINARIOS Y ESPECIALES SANCIONADORES)

Introducción

Hablar del principio de proporcionalidad en materia electoral es referirse a la adecuación de la sanción con la gravedad de la infracción; por lo que el referido principio constituye un pilar fundamental en los sistemas democráticos actuales. Así la proporcionalidad busca el equilibrio entre la falta de castigo (impunidad), y el exceso o abuso en la sanción.

Con el presente trabajo, se busca analizar el principio de proporcionalidad en materia electoral en la aplicación de una sanción con respecto a la comisión de alguna infracción, por lo que se analizará desde una perspectiva normativa, doctrinal y jurisprudencial.

Concepto

El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico aplicable en diversas materias del derecho, de manera especial en penal, constitucional y administrativo, este se basa en el concepto de que cualquier restricción de derechos o imposición de sanciones por parte del Estado debe de ser adecuada, necesaria y equilibrada en relación con el objetivo perseguido.

Por lo anterior, los elementos del principio de proporcionalidad específicamente tratándose de sanciones en materia electoral, son idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Ideidad: Esta se refiere a que la sanción debe de ser adecuada no solo para corregir la infracción, sino que debe buscar inhibir y disuadir la comisión de futuras infracciones, por lo que debe de buscar la prevención y no la retribución, ello con la finalidad de que se cumplan los principios rectores en materia electoral en específico la equidad en la contienda.

Necesidad: Se busca la sanción o medida menos gravosa que logre el mismo objetivo, ello con la finalidad de no afectar de manera excesiva los derechos del sujeto sancionado.

Proporcionalidad en sentido estricto: La sanción debe de guardar un estricto equilibrio entre la gravedad de la infracción y la afectación a los derechos del sancionado, por lo que la gravedad de la pena debe de ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido.

Ahora bien, este principio en materia electoral se refleja en la obligación de los órganos jurisdiccionales (Salas y Tribunales locales), de revisar si las sanciones impuestas a los partidos políticos, candidatos, aspirantes, ciudadanos y/o empresas

son proporcionales a la comisión de la infracción o en el caso de procedimientos sancionadores especiales imponer la sanción de manera proporcional; y con respecto a los órganos administrativos (Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Autónomos), aplicar la sanción adecuada.

Criterios aplicables para determinar la proporcionalidad en Sanciones Electorales

En los procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales, una vez que el órgano competente (jurisdiccional o administrativo), declara que ha quedado acreditada la existencia de la infracción a la normativa electoral, debe de considerar las circunstancias que rodean la conducta contraventora de la norma, para lo que toma en cuenta diversos criterios, como son:

- **Gravedad de la falta:** En este concepto se valúa el impacto que la infracción pudo tener en la vulneración a la equidad en la contienda electoral; por lo que no se puede considerar igual de grave la aparición de un menor de edad en un spot sin el consentimiento de sus padres, que la utilización de recursos públicos para propaganda electoral y/o la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley.
- **Intencionalidad del infractor:** Aquí, se tiene que acreditar la existencia de todos los elementos de la infracción a sancionar, entre ellos el dolo, de lo contrario la conducta se debe de calificar como culposa, por lo que la sanción no será igual si el denunciado tenía la intención de cometer la infracción o la misma fue realizada sin intencionalidad, derivada del incumplimiento de un deber de cuidado.
- **Reincidencia:** De conformidad con la ley en materia electoral, la reincidencia consiste en que el infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere el código de la materia, incurra nuevamente en la misma conducta infractora; es importante que el denunciado ya se encuentre juzgado y condenado por una sentencia firme para que se actualice el presente supuesto. Así, la repetición de una conducta transgresora puede y debe justificar una sanción más severa.
- **Beneficio obtenido o daño causado:** En este concepto se tendrá que valorar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio ocasionado por el incumplimiento de una obligación.
- **Capacidad económica del infractor:** Cuando se determine sancionar al sujeto infractor una multa, esta debe de ser razonada y calculada de conformidad económica del mismo, ya que no se sancionará de la misma manera a un candidato de partido que a un partido político, ni se multara con la misma

cantidad a un partido político nacional que a un partido político estatal que cuente con un presupuesto menor otorgado.

Criterios relevantes

Jurisprudencia 20/2024

FISCALIZACIÓN. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA SE BASAN EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE ES COMETIDA UNA FALTA, SIN QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO CRITERIOS FIJOS, INAMOVIBLES O VINCULANTES.¹

Esta refiere que la autoridad administrativa tiene la potestad de sancionar la conducta infractora en función de las circunstancias de cada caso, ya que la autoridad tiene como objetivo inhibir las conductas infractoras, por lo que no tiene la obligación de justificar un cambio de criterio, ya que este nos es obligatorio, inamovable y/o vinculante.

Jurisprudencia 30/2024

PRINCIPIO DE TIPICIDAD. SU EXPRESIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.²La anterior jurisprudencia fija como debe de entenderse el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador, ya que si bien es cierto a este le son aplicables algunos principios del derecho penal, en lo que se refiere al principio de tipicidad en la comisión de delitos es estricto sin que quepa la imposición de penas por analogía o por mayoría de razón, ya que se debe de atener a lo expresamente descrito en la ley; en materia administrativa no se tiene la misma rigidez, y ello se debe a la gran variedad de conductas que pueden dar lugar a incumplimiento de obligaciones o a la violación de prohibiciones a cargo de los sujetos que intervienen en el ámbito electoral.

Jurisprudencia 10/2018

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.³ La referida jurisprudencia atiende al principio de legalidad que rige los procedimientos sancionadores, estableciendo que la multa que se imponga se debe de fijar en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que con ello se otorga seguridad jurídica, ya que parte de un valor predeterminado.

Jurisprudencia 24/2014

¹ Pendiente de publicación en la a Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

² Idem.

³ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 23 y 24.

MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).⁴ De la presente jurisprudencia se advierte que, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho adquirido, es necesario que se tome en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por lo que una multa que se imponga con base en montos aproximados para considerar un eventual beneficio vulneraría los principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones.

Jurisprudencia 41/2010

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.⁵ Mediante la tesis referida, se establecen los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe de tener en cuenta para tener por actualizada la reincidencia y con esto agravar una sanción, son a) El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción, por lo que no será la misma infracción si se colocó propaganda en equipamiento urbano en etapa de precampaña, que si se vulnera la misma norma en etapa de campaña; b) Los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y c) Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, tiene el carácter de firme, por lo que en este supuesto no se podrá considerar como reincidencia si la resolución aun esta sub judice.

Conclusión

No obstante que se han construido criterios por la autoridad jurisdiccional que han facilitado atender los conflictos que surgen en la aplicación de sanciones, aún queda camino por recorrer, por lo que, a pesar de los avances en la aplicación del principio de proporcionalidad en procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales, aun persisten retos y desafíos que deben de ser atendidos.

Así se tiene que las autoridades administrativas y jurisdiccionales establezcan criterios más uniformes para la determinación de sanciones; lo anterior lleva a que se debe evitar la discrecionalidad excesiva, por lo que la proporcionalidad no debe de convertirse en un pretexto para que los juzgadores generen inseguridad jurídica.

Con el surgimiento de nuevas formas de infracción ocasionadas con los avances de la tecnología, el auge de las campañas digitales y las redes sociales, se deben desarrollar criterios específicos para sancionar, buscando en este y en todos los casos garantizar sanciones equitativas y justas, sin caer en los castigos

⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.

⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 45 y 46.

desproporcionados y siempre con la finalidad de evitar la impunidad y la inhibición de nuevas conductas infractoras.